

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)**

**Septiembre 15 de 2022:** Al despacho el proceso contra **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** identificado con C.C. No. 1.031.130.254, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0348 del 29 de junio de 2022, se recibe procedente del área Domiciliarias Epcpicota, el reporte de visitas del PPL en mención.

Una vez, analizadas las diligencias este Juzgado emitirá pronunciamiento sobre la posible libertad por pena cumplida del infractor. Sírvasse proveer.

**BLANCA CECILIA GUTIERREZ**  
SECRETARIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

**Septiembre quince (15) de dos mil veintidós (2022)**

**AUTO INTERLOCUTORIO No. 0500**

<b>CUI:</b>	<b>110016000015201405465</b>
<b>Sentenciado:</b>	<b>JOHN ANDERSON BOCANUMEN</b>
<b>Identificación:</b>	<b>C.C. No. 1.031.130.254</b>
<b>Sitio de Reclusión:</b>	<b>PRISIÓN DOMICILIARIA – COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA D.C. – LA PICOTA -</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 DECRETA REHABILITACION DE PENAS ACCESORIAS.</b>

**1.- OBJETO A DECIDIR**

Procede el despacho a pronunciarse sobre el cumplimiento de la pena impuesta a **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** identificado con C.C. No. 1.031.130.254, quien se encuentra en prisión domiciliaria en la Calle 12 No. 1-21, barrio El Porvenir en Mosquera Cundinamarca, vigilado por el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -

**2.- CUESTIÓN PREVIA**

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

### 3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 18 de mayo de 2014 y preacuerdo aprobado, el Juzgado 5º Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 6 de septiembre de 2016, CONDENÓ a **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** a la pena principal de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISIÓN** como cómplice responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la prohibición del derecho al porte y tenencia de armas, por un lapso igual al de la sanción principal. NO RECONOCIÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero CONCEDIÓ la prisión domiciliaria art. 38B del C.P. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 6 de septiembre de 2016.

El homólogo 16 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso el 28 de marzo de 2018 y ordenó expedir orden de captura No. 013/18<sup>1</sup> en contra del infractor.

Por auto del 8 de mayo de 2018 legalizó la captura del condenado y expidió boleta de encarcelación No. 33/18 ante el señor director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB Picota.

**JOHN ANDERSON BOCANUMEN** ha descontado pena dentro del presente asunto en dos oportunidades: **i) el 18 de mayo de 2014**<sup>2</sup> (conforme a solicitud elevada por la Fiscalía, el Juzgado 56 Penal Municipal de garantías de Bogotá D.C., concedió al infractor la libertad inmediata y sin ninguna restricción y libró Boleta de Libertad No. 094) y; **ii) desde el 8 de mayo de 2018**<sup>3</sup>

En cumplimiento a lo ordenado en el fallo condenatorio, el condenado prestó caución por el equivalente a UN (1) SMLMV, mediante póliza judicial 17-53-101004774 el 8 de mayo de 2018 y suscribió diligencia de compromiso el 10 de mayo de 2018, fijó el domicilio en la Calle 55 No. 29-19 Sur- San Vicente en Bogotá D.C.,

El homólogo 16 de Bogotá D.C., mediante auto del 11 de mayo de 2018 ordenó librar Boleta de Traslado Domiciliario No. 19/18<sup>4</sup>, y como quiera que el condenado fue trasladado a las instalaciones de la URI Puente Aranda, dicho Juzgado por decisión del 17 de mayo de 2018, dispuso dejar sin efectos jurídicos la boleta de traslado No. 19/18 y ordenó expedir la boleta de traslado domiciliario No. 22/18<sup>5</sup> con destino a la URI de Puente Aranda y/o Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota.

Por auto del 31 de mayo de 2018, dispuso remitir las diligencias a los homólogos de Tunja Boyacá, como quiera que el condenado registró como privado de la libertad en el EPC COMBITA MEDIANA SEGURIDAD.

El Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Tunja Boyacá avocó conocimiento del proceso el 23 de julio de 2018 y el homólogo 8º de Tunja por decisión del 3 de agosto de 2018 dispuso materializar la prisión domiciliaria del condenado para que de manera inmediata y urgente se efectuara el traslado del condenado a la Calle 55 No. 29-19 Sur – San Vicente de Bogotá D.C. y ordenó la remisión del expediente a los homólogos de Bogotá D.C., por competencia.

A través de auto del 19 de noviembre de 2018, el homólogo 16 de Bogotá D.C., dispuso reasumir el conocimiento del proceso y autorizó el cambio de domicilio del condenado a la

<sup>1</sup> Folio 27 – archivo 002 – expediente digitalizado

<sup>2</sup> Acta audiencia de garantías, Acta de derechos del capturado, Boleta de Libertad No. 094 – folio 14,19 y 21 – archivo 002 expediente digitalizado

<sup>3</sup> Acta de Derechos de Capturado – folio 33 – archivo 002 – expediente digitalizado.

<sup>4</sup> Folio 21 – archivo 003 – expediente digitalizado

<sup>5</sup> Folio 30 – archivo 003 – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

Calle 55 No. 55 – 28-21 Sur del Barrio San Vicente de Bogotá D.C., con la Boleta de Traslado Domiciliaria No. 039/18<sup>6</sup>.

Mediante proveído del 10 de diciembre de 2019, corrió el traslado del artículo 477 del C.P.P., previo a la eventual revocatoria de la prisión domiciliaria, para que presentara las explicaciones pertinentes frente al incumplimiento de las obligaciones adquiridas al momento de ser concedida la prisión domiciliaria y ordenó a través del Asistente Social del Centro de Servicios Administrativos de Bogotá, practicar la visita del lugar de reclusión del condenado, para verificar las condiciones en las que cumple la condena.

Surtido el traslado del artículo 477 del C.P.P., por auto del 10 de febrero de 2020, el homólogo 16 de Bogotá D.C., resolvió NO REVOCAR el sustituto de prisión domiciliaria al infractor, solicitó ante el Complejo Carcelario y Metropolitano de Bogotá – COMEB La Picota -, el informe pormenorizado de las visitas de control efectuadas al prenombrado y requirió al condenado a fin que aclarara la nomenclatura de su lugar de reclusión domiciliaria.

El día 3 de marzo de 2020, el condenado rindió ante el homólogo 16 de Bogotá D.C., diligencia de declaración en la que manifestó: “(...) *PREGUNTADO: Haga una relación sucinta de los inmuebles en los cuales ha cumplido la pena impuesta bajo el sustituto de la prisión domiciliaria. CONTESTADO: La solicite para la primera dirección que se ubica en la Calle 55 Sur No. 29 - 19 de Bogotá, pero pues en vista de que los dueños no admitieron recibirme, desalojaron a mi mama, con quien nos fuimos a vivir a la Calle 55 No. 28 — 21 sur de Bogotá, lo cual se solicitó al Juzgado Dieciséis, y ahora debí trastearme para la Calle 12 No. 1 — 23 del Barrio el Porvenir Rio del Municipio de Mosquera, por la falta de recursos económicos, mientras arreglo mi situación y solicito el permiso laboral, pues mi familia depende de mí. PREGUNTADO: Manifieste al despacho las razones por las cuales en memorial radicado el 19 de noviembre de 2018 solicitó cambio de domicilio para la Calle 55 No. 29 — 21 Sur. CONTESTADO: Fue un descuido personal el momento de salir, y se escribí un numero mal, pues la dirección a la cual solicite el cambio de domicilio es la Calle 55 No. 28 - 21 Sur. PREGUNTADO: Manifieste al despacho desde cuándo se encuentra domiciliado en la Calle 12 No. 1 - 23 del Barrio el Porvenir Rio del Municipio de Mosquera. CONTESTADO: Desde hace más o menos el 15 de febrero de 2020, y en la contestación a una transgresión indique que fue por situaciones económicas, pues me tocó trasladarme de inmediato o era pasar la noche en la calle. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si ha tenido más cambios o salidas de su lugar de reclusión domiciliaria que no han sido informados al despacho y/o a la autoridad penitenciaria. CONTESTADO: Si, pues una que un oficial de Cota me detuvo y me pidió antecedentes, me radio y paso el informe, pero estaba viajando por que falleció mi abuelita en Chiquinquirá. PREGUNTADO: Desea agregar algo a la presente declaración. CONTESTO: No, pues que estoy dispuesto a comparecer cuando sea necesario para aclarar la dirección cuantas veces sea necesario, porque estoy a la espera de solicitar un permiso para trabajar, y ante todo las disculpas (...)*”.

El homólogo 16 de Bogotá D.C., por auto del 5 de marzo de 2020, dispuso autorizar el cambio de domicilio al condenado a la Calle 12 No. 1-21 del barrio El Porvenir en Mosquera Cundinamarca, haciéndose la observación que sólo se tendrá por autorizado el cambio de domicilio desde el 2 de marzo de 2020, fecha de radicación de la petición ante el Centro de Servicios Administrativos de esa ciudad, igualmente, ordenó remitir de manera inmediata la actuación a este Juzgado, indicando que se encuentra pendiente pro resolver la eventual revocatoria del sustituto de la prisión domiciliaria concedida, frente a las transgresiones del 14 de diciembre de 2019, 28 de enero de 2020 y cambiar de lugar de reclusión sin previa autorización del despacho.

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0470 del 6 de agosto de 2020 y conforme a lo manifestado por el homólogo 16 de Bogotá, respecto a las transgresiones cometidas por el interno, se requirió ante el señor director y

<sup>6</sup> Folio 33 – C02 (003) – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

asesor jurídico del complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, que remitiera los informes de visita de control domiciliario efectuadas al condenado.

Mediante auto interlocutorio No. 0348 del 29 de junio de 2022, esta agencia judicial negó al infractor la libertad condicional por falta de los documentos previstos en el artículo 471 del C.P.P., y solicitó ante el señor director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -, la mencionada documentación.

En la presente oportunidad procede este despacho a pronunciarse sobre la posible libertad por pena cumplida del infractor.

### **3.1. SOBRE EL COVID-19**

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020<sup>7</sup> del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: "[ ... ] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable

---

<sup>7</sup> ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*<sup>8</sup>.

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

#### 4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

##### 4.1. Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de libertad condicional impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgado pena bajo el sustituto de prisión domiciliaria en la Calle 12 No. 1-21 del barrio El Porvenir en Mosquera Cundinamarca, vigilado por el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota - conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007<sup>9</sup>.

Conforme a los hechos ocurridos el 18 de mayo de 2014, **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

##### 4.2. Sobre la Prisión Domiciliaria

En el presente caso objeto de estudio, se tiene que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0348 del 29 de junio de 2022, se recibe a través del correo institucional el 5 de julio de 2022 procedente del área Domiciliarias Epcpicota, el informe de visitas efectuadas al condenado **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** mediante el cual informan:

<sup>8</sup> CSJ RAD 794 (01-07-20)

<sup>9</sup> 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)<sup>9</sup>.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

- ✓ Informe del 14 de octubre de 2021. Hora de visita: 12:30. Localidad Tunjuelito. Dirección Calle 55 # 29-19 Sur. San Vicente. Autoridad Juzgado 16 EPMS. Novedad: VISITA NEGATIVA, no se encontró al PPL, informa la señora Sindy Zapata, residente del inmueble que el ppl, no vive en este inmueble.
- ✓ Informe (fecha no legible año 2022). Hora de visita; 11:55. Localidad Tunjuelito. Dirección Calle 55 # 29-19 Sur. San Vicente. Autoridad 16 EPMS. Novedad: manifiestan los inquilinos del predio que en este domicilio no vive nadie con estos nombres / no entregan información personal.

Vistos los informes de visita domiciliaria, se tiene que el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, **NO REALIZÓ visitas al domicilio autorizado mediante auto del 5 de marzo de 2020, por el homólogo 16 de Bogotá D.C., el cual se fijó en la Calle 12 No. 1-21 del barrio El Porvenir en Mosquera Cundinamarca.**

Por lo tanto, se infiere **que el Complejo Carcelario NO informó oportunamente al Área Domiciliarias, para que se realizaran las respectivas visitas al interno al domicilio autorizado**

Sin embargo, este Juzgado nota con preocupación la situación que se está presentando con los domiciliarios, no solo en los municipios a los que se les vigila la pena (Circuito de Funza, Villeta y Facatativá) sino a nivel nacional, en la que no existe un control de vigilancia de parte de los funcionarios del INPEC, debido a diferentes situaciones, como el personal, la ubicación, la congestión vehicular, el presupuesto, ahora el COVID 19 etc., que han generado una vigilancia deficiente. A pesar del escaso personal con que contamos (asistente social, asistente administrativo, secretaria y sustanciador) no se pudo ordenar la visita debido a las normas de salubridad impuestas por la OMS, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura. Complementa lo anterior que de parte del INPEC están cerrando las cárceles a nivel departamental creando una congestión sobre la vigilancia de los implicados que se encuentren con este mecanismo sustitutivo como se presentó recientemente con la Cárcel de Zipaquirá y Funza cuya responsabilidad recae en las de Bogotá, o actualmente en la de Villeta ya que son un volumen alto de personas que se encuentran con este mecanismo sustitutivo.

Al respecto se trae a colación reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que señaló:

*“...2.4. Las premisas normativas antes mencionadas, así como los antecedentes particulares del caso sometido a consideración de la Corte, permiten deducir las siguientes reglas:*

*i) El estatus jurídico de detenido lo adquiere el procesado en virtud de la respectiva orden judicial, una vez la misma se materialice, lo que se aviene a lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución Política sobre la reserva judicial para la afectación de la libertad. Esa condición no varía por el hecho de que la privación de la libertad se materialice en su domicilio o en un centro carcelario. La condición de detenido o privado de la libertad se mantiene hasta que la autoridad competente disponga lo contrario, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley.*

*ii) Por tanto, si a una persona privada de la libertad en su domicilio se le atribuye el incumplimiento de las obligaciones que debe cumplir para mantener ese beneficio, se abre la posibilidad del cambio de sitio de reclusión, sin que ello implique que su situación jurídica – de detenido – varíe automáticamente, pues ello solo puede ocurrir por dos razones: (a) que un juez disponga su libertad, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley; o (b) que se demuestre que el detenido domiciliariamente se sustrajo al régimen de privación de la libertad.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

*iii) Además, la condición de detenido y la privación de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria no están supeditadas a la realización de las correspondientes visitas de control a cargo del INPEC, porque aquellas son labores de «apoyo» encaminadas a garantizar el cumplimiento de la condena en el domicilio<sup>10</sup>. (...)*

Más adelante complemento:

*“...Además, como se dijo en páginas precedentes, las trasgresiones al régimen de la prisión domiciliaria imponen la inminente privación de la libertad en centro carcelario, pero de no disponerse ésta, habrá de entenderse que el condenado continúa purgando la condena en el domicilio fijado, siempre que no se acredite su evasión del mismo...”<sup>11</sup>*

En consecuencia, este Juzgado procederá a emitir pronunciamiento sobre la posible libertad por pena cumplida del condenado.

#### 4.3. Sobre la Libertad por pena cumplida

**JOHN ANDERSON BOCANUMEN** ha descontado pena dentro del presente asunto en dos oportunidades: **i) el 18 de mayo de 2014<sup>12</sup>** (conforme a solicitud elevada por la Fiscalía, el Juzgado 56 Penal Municipal de garantías de Bogotá D.C., concedió al infractor la libertad inmediata y sin ninguna restricción y libró Boleta de Libertad No. 094) y; **ii) desde el 8 de mayo de 2018<sup>13</sup>** hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **1593 días** que equivalen a **53 meses y 3 días de la pena impuesta**

El sentenciado NO cuenta con redenciones de pena reconocidas.

Así las cosas, encuentra este Despacho que el interno hasta la fecha acumula un total de **53 meses y 3 días**, lo que significa que cumple la pena impuesta de **54 MESES DE PRISIÓN** el próximo **12 DE OCTUBRE DE 2022**.

Sobre el tiempo en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

*“...Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(...)”*

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **por homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

*Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.*

10 CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 38C. CONTROL DE LA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad **con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario** (Inpec).

El Inpec deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le **informará al Despacho Judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena.**

<sup>11</sup> CSJ T Radicación N° 106432 (03-09-19) M.P. Dra Patricia Salazar Cuellar

<sup>12</sup> Acta audiencia de garantías, Acta de derechos del capturado, Boleta de Libertad No. 094 – folio 14,19 y 21 – archivo 002 expediente digitalizado

<sup>13</sup> Acta de Derechos de Capturado – folio 33 – archivo 002 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

*Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.*

*Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.*

*4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad.”<sup>14</sup>*

En efecto, se tiene que, del cumplimiento físico de la pena principal de **54 meses de prisión**, impuesta por el Juzgado 5º Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 6 de septiembre de 2016, **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** cumple la pena de prisión impuesta a partir del día **12 DE OCTUBRE DE 2022**, fecha desde la cual se concederá la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.

Acorde con lo anterior y de conformidad con lo normado en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) la Secretaría del Despacho oficiará a las entidades a las que se les comunicó la sentencia y se cancelarán las órdenes de captura que en su contra pudiesen existir por cuenta del presente asunto, rindiendo los informes de ley.

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **JOHN ANDERSON BOCANUMEN**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva **pero sólo a partir del 12 de octubre de 2022**.

Ahora bien, en lo que respecta a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la prohibición del derecho al porte y tenencia de armas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** identificado con C.C. No. 1.031.130.254. En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.

En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales SPA de Bogotá – Juzgado 5º Penal del Circuito con función de conocimiento -, para su archivo definitivo.

La libertad se hará efectiva para ante las directivas del COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA D.C. – LA PICOTA -, **pero sólo a partir del 12 DE OCTUBRE DE 2022, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERA SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

<sup>14</sup> T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

#### 4.4. Sobre la notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 12 No. 1-21, barrio El Porvenir en Mosquera Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** al sentenciado el contenido del presente auto a través del correo electrónico [jalexanderbravo45@gmail.com](mailto:jalexanderbravo45@gmail.com)

Por la Secretaría del Juzgado, PROCÉDASE a librar la **BOLETA DE LIBERTAD** a favor de **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** identificado con C.C. No. 1.031.130.254, pero solo a partir del 12 de octubre de 2022 y ante las directivas del **COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ D.C. – LA PICOTA** -, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.

### 5. OTRAS CONSIDERACIONES

#### 5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

*“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.460 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la libertad condicional.

Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

*“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia*

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

y equidad»<sup>15</sup>, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”<sup>16</sup>

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, motivo que lo lleva a acceder la petición invocada.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario “desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”.<sup>17</sup>

## 5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso “suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

---

<sup>15</sup> Ibídem.

<sup>16</sup> CSJ T 102248

<sup>17</sup> C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

## 6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

### RESUELVE

**PRIMERO. - RECONOCER** que el **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** identificado con C.C. No. 1.031.130.254, cumple a partir del **12 DE OCTUBRE DE 2022** con el total de la pena de prisión de **54 meses de prisión** impuesta por el Juzgado 5º Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 6 de septiembre de 2016,

**SEGUNDO. - CONCEDER a JOHN ANDERSON BOCANUMEN, LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, pero solo a partir del 12 DE OCTUBRE DE 2022**, conforme a lo consignado en la parte motiva del presente proveído.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

**TERCERO.** - En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **JOHN ANDERSON BOCANUMEN**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

**CUARTO.** - Ahora bien, en lo que respecta a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la prohibición de consumir sustancias estupefacientes, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** identificado con C.C. No. 1.031.130.254, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

**QUINTO.** - Teniendo en cuenta que **JOHN ANDERSON BOCANUMEN** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 12 No. 1-21, barrio El Porvenir en Mosquera Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** al sentenciado el contenido del presente auto a través del correo electrónico [jalexanderbravo45@gmail.com](mailto:jalexanderbravo45@gmail.com)

**SEXTO. - ORDENAR** que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra **JOHN ANDERSON BOCANUMEN**, en razón de este proceso.

**SEPTIMO.** - En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales SPA de Bogotá – Juzgado 5º Penal del Circuito con función de conocimiento, para su archivo definitivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y de Apelación.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**NELSON NOGUERA PINILLOS**  
**J U E Z**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA  
[jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**BOLETA DE LIBERTAD No. 0138**

FECHA	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2022
Señor Director: <b>COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA D.C. – LA PICOTA -</b>	
Sírvasse poner en libertad a: <b>JOHN ANDERSON BOCANUMEN.-</b>	
Cédula de Ciudadanía No. <b>1.031.130.254 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.</b>	
Lugar de nacimiento: <b>BOGOTA D.C. -</b>	
Fecha de Nacimiento: <b>29 DE OCTUBRE DE 1990. -</b>	
Delitos: <b>FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.-</b>	
Estado Civil: <b>N/A. -</b>	
Profesión u oficio: <b>N/A. -</b>	
Nombres de los padres: <b>YOLANDA. -</b>	
Nombre del conyugue: <b>N/A.-</b>	
Motivo de libertad: <b>LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022.-</b>	
CUI: <b>110016000015201405465 -.</b>	
Número Interno: <b>2020-0127.-</b>	
Autoridades que conocieron: <b>CUI 110016000015201405465 - FISCALIA 331 LOCAL BOGOTA D.C., JUZGADO 56 PENAL MUNICIPAL BOGOTA D.C - URI TUNJUELITO CIUDAD BOLIVAR CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS, JUZGADO 5º PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C., JUZGADO 16 EPMS BOGOTA D.C., Y ESTE ESTRADO JUDICIAL 2020-0127.-</b>	
<b>OBSERVACIONES: ESTA LIBERTAD SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTENCIADO JOHN ANDERSON BOCANUMEN, NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN. -</b>	
<div><p>NELSON NOGUERA JUZGUEZ</p></div>	